



número 108 - Julio 2006

EL TEMA CENTRAL DE ESTA EDICIÓN: LA REVISIÓN DEL FSC DE LA CERTIFICACIÓN DE PLANTACIONES

A partir de octubre de 2004 el Consejo de Manejo Forestal (FSC) ha llevado a cabo un proceso de revisión de la certificación de las plantaciones cuyos resultados aún no son claros. El WRM ha planteado una y otra vez sus inquietudes en cuanto a los impactos sociales y ambientales de las plantaciones certificadas, y ha señalado que la certificación está debilitando las luchas de los pueblos locales y fortaleciendo a las empresas de plantaciones. Por lo tanto el resultado de la revisión en curso es muy importante, tanto para la credibilidad del FSC como para los pueblos locales que se oponen a los grandes monocultivos de árboles. Esperamos que la información y el análisis que brindamos en este boletín sean un aporte útil a este debate, tanto dentro como fuera del FSC.

NUESTRA OPINIÓN

- Proceso de revisión de certificación de plantaciones: el futuro del FSC en juego

APORTES AL PROCESO DE REVISIÓN

- El proceso del FSC de Revisión de Plantaciones: ¿aumentar las exigencias o rebajar las normas?
- Un gusano en el corazón de la manzana del FSC: intereses creados y la llamada "certificación independiente"
- Brasil: pidiendo explicaciones al FSC, Imaflo/Smartwood y Aracruz
- Plantaciones certificadas en Uruguay: ¿puede el FSC garantizar tranquilidad de espíritu a los consumidores?
- El poder de los grupos empresariales. El caso del FSC local de Ecuador

INVESTIGACIONES SOBRE PLANTACIONES CERTIFICADAS

- Brasil: la certificación de las plantaciones de V&M y Plantar
- Ecuador: beneficio cero para las comunidades por las plantaciones certificadas de FACE-PROFAFOR
- Sudáfrica: investigación considera que las plantaciones de árboles certificadas por el FSC son un legado del apartheid
- Swazilandia: los impactos de las plantaciones de Mondi Peak certificadas por el FSC
- Uruguay: cuatro empresas que no deberían estar certificadas

MÁS CUESTIONAMIENTOS DE PLANTACIONES CERTIFICADAS

- Australia: monocultivos forestales certificados en tela de juicio debido a las fumigaciones aéreas y la pérdida de la biodiversidad
- Colombia: la increíble y triste certificación de las plantaciones de Smurfit
- Ecuador: la plantación certificada Río Pitzara de Endesa-Botrosa
- España: grupos españoles se retiran del FSC
- Irlanda: cuestionan las plantaciones de Coillte certificadas por el FSC
- Venezuela: certificación de Smartwood a plantaciones de empresa chilena puesta en tela de juicio

NUESTRA OPINIÓN

- Proceso de revisión de certificación de plantaciones: el futuro del FSC en juego

En materia de certificación de plantaciones, el FSC ha llegado a una encrucijada, en la que se juega nada menos que su credibilidad. El proceso interno de revisión de la certificación de plantaciones ya está bastante avanzado y en setiembre de este año el Grupo de Trabajo conformado a tales efectos planteará sus recomendaciones.

En ese sentido, interesa destacar que hay varios aspectos preocupantes en ese proceso. Por un lado, que desde que se inició, el FSC ha seguido certificando grandes extensiones de plantaciones. En 2002, cuando la Asamblea decidió iniciar el proceso, había 3,3 millones de hectáreas certificadas. En 2004, cuando finalmente se instrumentó el proceso de revisión, había pasado a 4,9 millones y hoy ha alcanzado la cifra de 7,4 millones de hectáreas. Pese a que el WRM y otras organizaciones solicitaron formalmente una moratoria a la certificación de plantaciones hasta tanto no culminara el proceso de revisión ([ver http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/moratoria.html](http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/moratoria.html)), el pedido no fue aceptado.

Más preocupante aún es el hecho de que se está hablando de eliminar totalmente el Principio 10 (que se refiere expresamente a plantaciones). Durante años hemos estado señalando las graves carencias de dicho principio -que permite certificar prácticamente cualquier plantación- apuntando a su mejoramiento sustancial ([ver http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/principio10.html](http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/principio10.html)). Pretender -como ahora se pretende- que eliminarlo sería la solución resulta insólito. Por otro lado, ello llevaría a una mayor confusión conceptual, ya que definitivamente el FSC pasaría a considerar a bosques y plantaciones como sinónimos.

Cabe además señalar que en el actual proceso de revisión no se está analizando un tema muy importante: el de los intereses creados de las empresas certificadoras, cuyas ganancias dependen más de la cantidad de hectáreas certificadas que de la calidad de la certificación que llevan a cabo ([ver artículo "Un gusano en el corazón de la manzana del FSC: intereses creados y la llamada "certificación independiente" \)](#)).

Como evidencia de lo anterior resulta ilustrativa la reacción del FSC y de las empresas certificadoras ante la publicación de una investigación del WRM sobre cuatro plantaciones certificadas en Uruguay ([ver http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.pdf](http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.pdf)). La respuesta de Smartwood no solo falsea la realidad, sino que además no responde a las críticas hechas en el informe ([ver -en inglés- http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/fymnsa_clarifications.pdf](#)). La otra empresa involucrada (SGS) elabora una respuesta, que entrega al FSC, pero no la hace pública. En base a la respuesta de las partes involucradas en la denuncia y sin contactar ni al WRM ni al autor del estudio, ni iniciar una investigación interna, el Director de FSC Internacional, Heiko Liedeker, desestima públicamente el informe en una declaración con fecha 14 de julio de este año, titulada "El FSC garantiza tranquilidad de espíritu a los consumidores" (FSC guarantees peace of mind to consumers -disponible en inglés en la siguiente dirección http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/Peace_mind.pdf). Como autores del informe, les podemos garantizar que ninguna de esas plantaciones debería estar certificada.

También resulta preocupante el intento de reinterpretar criterios existentes -que en los hechos no se cumplen- como forma de adecuar los criterios a las plantaciones y no las plantaciones a los criterios ([ver el comentario sobre el criterio 6.3 en el artículo "El proceso del FSC de Revisión de Plantaciones: ¿aumentar las exigencias o rebajar las normas?"](#)). De hecho, si el cumplimiento estricto de todos los principios y criterios del FSC fuera una exigencia para la certificación de plantaciones, ningún monocultivo de árboles a gran escala podría recibir el sello del FSC. Sin embargo, gracias a la "flexibilidad" de las certificadoras, logran obtenerlo en la mayoría de los casos.

Por otro lado, ni el FSC ni el Grupo de Trabajo parecen tomar seriamente en cuenta la evidencia documentada sobre el impacto de las plantaciones en general y de las certificadas en particular. Sin embargo, abunda la evidencia que muestra el impacto acumulado de plantaciones, en particular sobre flora, fauna, agua y sociedad, que muestra la necesidad de tomar en cuenta el impacto conjunto de todas las plantaciones en una región y no solo de una en particular.

Por supuesto que no nos corresponde a nosotros decirle al Grupo de Trabajo lo que debe hacer. Pero sí podemos pedirle que el resultado de su trabajo sirva para asegurar el cumplimiento del mandato expreso del FSC en cuanto a que todas las operaciones certificadas (sean bosques o plantaciones) sean "socialmente beneficiosas, ambientalmente adecuadas y económicamente viables". Dado que muchas de las plantaciones actualmente

certificadas no cumplen con uno, dos o todos esos tres elementos, correspondería que sus recomendaciones incluyeran:

- la inmediata de-certificación de las plantaciones más cuestionadas, cuyos impactos sociales y ambientales hayan sido suficientemente documentados
- el inmediato inicio de una investigación independiente acerca de todas las demás plantaciones cuestionadas
- la implementación de una moratoria a nuevas certificaciones de grandes plantaciones hasta que se estudie seriamente si este tipo de monocultivos a gran escala puede o no cumplir con los tres elementos del mandato del FSC.

Es bien conocida la posición del WRM en cuanto a la certificación de plantaciones por el FSC y nuestra oposición a la expansión de monocultivos de árboles en general. Pero lo que nos importa en el actual proceso de revisión es que se introduzcan cambios profundos que eviten que –sin quererlo- el FSC siga debilitando las luchas locales contra empresas que impactan sobre el ambiente y los medios de vida de las comunidades locales. No nos preocupan las definiciones. Nos preocupa la gente y su ambiente.

Si de este proceso no resultan exigencias mucho mayores para certificar plantaciones, entonces no habrá servido de nada. Sería una derrota para el propio FSC, ya que aceleraría la pérdida de apoyo a nivel de las organizaciones sociales y ambientales que le aseguran su credibilidad. El caso de España, donde hay organizaciones haciendo campaña para convencer a las demás a retirarse del FSC (ver artículo en este boletín) debería ser tomado seriamente en cuenta.

En definitiva, el Grupo de Trabajo tiene en estos momentos una enorme responsabilidad. Puede optar por “cambiar algo para que nada cambie” o introducir cambios profundos a la política hasta ahora vigente. De la opción que elija dependerá la credibilidad futura de la organización.

inicio

APORTES AL PROCESO DE REVISIÓN

- El proceso del FSC de Revisión de Plantaciones: ¿aumentar las exigencias o rebajar las normas?

En noviembre de 2002, la Asamblea General del Consejo de Manejo Forestal (FSC) aprobó una moción que exige que el organismo revise su política de plantaciones. En aquel momento la superficie de plantaciones certificadas como bien manejadas bajo el sello del FSC llegaba a 3,3 millones de hectáreas.

Casi dos años después el FSC lanzó una Revisión de Plantaciones durante una reunión celebrada en Bonn, Alemania. Para ese entonces la superficie de las plantaciones certificadas por el FSC había ascendido a 4,9 millones de hectáreas.

La Revisión de Plantaciones consiste en dos fases: la Fase de Política y la Fase Técnica. Actualmente la Fase de Política está llegando a su fin. En su cuarta reunión celebrada en abril de 2006, el Grupo de Trabajo sobre Políticas elaboró un “Borrador de Recomendaciones”. La superficie de plantaciones certificadas por el FSC alcanza hoy los 7,4 millones de hectáreas.

Desde noviembre de 2002 y la moción de la Asamblea General, el FSC certificó otros 4,1 millones de hectáreas. Para hacerlo se sirvió de la versión actual de un borrador de política de plantaciones que “no es lo suficientemente clara y necesita mejorarse”, en palabras de la moción aprobada por los integrantes del FSC.

En su cuarta reunión el Grupo de Trabajo sobre Políticas elaboró su visión en cuanto a lo que le gustaría que el FSC lograra en los próximos diez años. El Grupo de Trabajo describe su visión como “aumentar las exigencias”, lo que implica que como resultado del proceso de Revisión de Plantaciones las normas del FSC mejorarán. Pero la visión y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sugieren que poco cambiará para las personas locales afectadas por las plantaciones industriales de árboles.

El Grupo de Trabajo sugiere que el FSC introduzca un “Sistema de Gestión Social” que los encargados de bosques y plantaciones puedan usar “para abordar temas sociales dentro del manejo de bosques y plantaciones, el cual será auditado, a su vez, por las entidades de certificación”. Esta propuesta pasa por alto el hecho de que a veces las comunidades locales están en oposición directa con los encargados de las plantaciones. En algunos casos, expresarse en contra de las empresas de plantaciones puede resultarles extremadamente peligroso. Sugerir que los encargados de manejo de las plantaciones tan solo tengan que referirse a un Sistema de Gestión Social es

absurdo.

Según el Grupo de Trabajo, los encargados de manejo de las plantaciones serán los responsables de las “consultas”. Se supone que los organismos certificadores del FSC serán capaces de “determinar si la aceptación ha sido ‘fabricada’” y si “la investigación realizada por los encargados del manejo respecto a las comunidades locales ha identificado a todos los afectados”. Pero los encargados de las plantaciones tienen poco interés en descubrir los problemas de sus operaciones de plantaciones. Entre tanto, determinar si todas las partes afectadas han sido identificadas y si la aceptación fue o no fabricada puede requerir meses y años de estudio; en todo caso, más que los pocos días que las entidades certificadoras del FSC ocupan en evaluar las operaciones de plantaciones.

Si para establecer las plantaciones se talaron bosques después de noviembre de 1994, esa operación no puede recibir la certificación del FSC. Con esto hay problemas, pues no se excluye la certificación de las plantaciones establecidas después de 1994 en, por ejemplo, praderas. Aumentar las exigencias podría significar prohibir la conversión de praderas y otros ecosistemas a plantaciones.

El Grupo de Trabajo propone un proceso aparte de revisión para el tema de la conversión, que considerará otros ecosistemas. Sin embargo, el Grupo de Trabajo propone que la revisión reconsidere la fecha límite de 1994, en parte sobre la base de que el sistema actual “puede excluir a algunos encargados responsables que no sabían de la existencia del FSC, en 1994, y que convirtieron bosques naturales a plantaciones actuando de buena fe, pero que ahora se ven marginados del proceso de certificación”.

Durante la reunión de 2004 realizada para lanzar la Revisión FSC de Plantaciones una de las personas que cuestionó la fecha límite de 1994 fue Arian Ardie, director de sustentabilidad de Asia Pulp and Paper (APP). Obviamente APP tiene interés en cambiar esta fecha. APP es responsable de la tala de cerca de 450.000 hectáreas de bosques en los últimos cinco años para alimentar su planta de Indah Kiat en Riau, según Nazir Foead, de WWF Indonesia. Pero en el extraño mundo del FSC, APP es una parte interesada cuyas opiniones es necesario tomar en cuenta.

Ya en julio de 2002 Tim Synnott, entonces director de Políticas Forestales del FSC, escribió: “Los Principios y Criterios y las directrices del FSC no son siempre claros o precisos, lo que lleva a interpretaciones diferentes y contradictorias por parte de evaluadores, encargados e integrantes del FSC”. Cuatro años más tarde el Grupo de Trabajo no ha aclarado la situación. En su lugar, en el informe de su cuarta reunión el grupo declara que “la falta de confianza en la certificación de plantaciones por el FSC no se debe a la estructura ni el contenido de los P&C”. El Grupo de Trabajo sugiere dejar todos los cambios en los Principios y Criterios a un proceso de revisión aparte.

El criterio 6.3 del FSC declara que: “Las funciones ecológicas vitales deberán mantenerse intactas, aumentarse o reponerse. Estas incluyen: a) La regeneración natural y la sucesión de los bosques; b) La diversidad genética de las especies y de los ecosistemas; c) Los ciclos naturales que afectan la productividad del ecosistema forestal”. Este criterio debería excluir de la certificación del FSC a todas las plantaciones industriales.

Pero en lugar de recomendar que los organismos certificadores del FSC apliquen rigurosamente este criterio, tal como está escrito, el Grupo de Trabajo propone que se interprete de la siguiente manera: “Las plantaciones certificadas por el FSC deberán asumir un método activo para optimizar su estrategia de conservación”. Esto equivale a un grave debilitamiento de este criterio.

En su visión del FSC, el Grupo de Trabajo espera que en el correr de diez años se genere “una demanda pública significativa de productos forestales certificados”. En el contexto de la Revisión de Plantaciones, esta es una declaración extraordinaria. Muchas plantaciones industriales de árboles suministran materia prima a la industria de la pulpa y el papel. El Grupo de Trabajo espera por lo tanto una “demanda significativa” de productos del papel. Esto socava tanto las luchas locales contra las plantaciones industriales de árboles como las campañas de las ONG para reducir el consumo de papel en el Norte.

En lugar de excluir las plantaciones industriales de árboles del sistema del FSC, el Grupo de Trabajo está haciendo que la certificación de dichas plantaciones resulte más fácil. El Grupo de Trabajo no está aumentando las exigencias: está rebajando las normas. De hecho tiene que hacerlo, si es que el FSC ha de tener ocasión de cubrir la “demanda significativa de productos forestales certificados” esperada en la visión del FSC del Grupo de Trabajo sobre Políticas.

Por: Chris Lang, correo electrónico: chrislang@t-online.de

==

El FSC invita a comentar el “Borrador de Recomendaciones” del Grupo de Trabajo sobre Políticas:
http://www.fsc.org/plantations/public_consultation/idiomas/ESP/01.php

[inicio](#)

- Un gusano en el corazón de la manzana del FSC: intereses creados y la llamada “certificación independiente”

En tanto uno de sus fundadores, soy responsable al menos en parte de haber permitido que el sistema del FSC adoleciera de una falla fatal en el momento de su establecimiento: dicho en forma simple, las llamadas entidades certificadoras “independientes” acreditadas por el FSC no son, de hecho, para nada independientes. Dado que he sido un atento observador del FSC desde que éste se estableció, hoy me queda claro que en muchas de las cosas que luego salieron mal subyace esta misma falla y comprendo por qué hoy se entregan tantos certificados completamente injustificados a empresas de maderero y plantaciones que no cumplen con la mayoría de los Principios y Criterios del FSC.

El problema es que hoy los contratos que rigen las evaluaciones previas a la certificación se acuerdan directamente entre las empresas de maderero o plantaciones y las empresas certificadoras acreditadas por el FSC. A causa de esto, y especialmente porque un certificado otorgado es garantía de ganancias futuras para las empresas certificadoras (gracias a las visitas de supervisión y las reevaluaciones), éstas tienen un fuerte incentivo financiero para otorgar certificados incluso cuando la empresa de maderero o plantaciones no cumple los Principios y Criterios del FSC.

Otra consecuencia es que estas empresas efectivamente compiten entre sí para demostrar a los potenciales “certificandos” que cada cual tiene la mayor probabilidad de otorgar la certificación, y la forma de hacerlo es rebajando las normas en la evaluación, “haciendo la vista gorda” a todos los problemas grandes que encuentran o “simpatizando” con la empresa de maderero o plantaciones en escrutinio. Efectivamente, en términos del rigor de sus evaluaciones las entidades certificadoras acreditadas están corriendo una “carrera para bajar los requerimientos”. Esto sirve para minar por completo la integridad del sistema del FSC.

Las pruebas abundan. Por ejemplo, hace cuatro años la Fundación por los Bosques Tropicales (Rainforest Foundation) obtuvo de uno de los certificadores acreditados documentos internos que demostraban que la entidad había ignorado deliberadamente las demandas de ONGs ambientalistas y sociales de Indonesia, que exhortaban a la moratoria completa de la certificación, en pos de sus propios “intereses económicos estratégicos”. Esto incluía, entre otras cosas, la emisión de lucrativas certificaciones FSC a por lo menos una empresa que estaba manifiestamente en grave incumplimiento de los Principios y Criterios (y que más tarde, tras una prolongada campaña, fueron retiradas).

En otros casos, los sistemas internos de evaluación de los certificadores parecen haber sido manipulados para garantizar que la empresa de maderero/plantaciones que se inspecciona logre llegar a la “nota mínima” necesaria para la certificación. Y en otros casos, los supuestamente independientes “consejos de certificación”, que existen para supervisar las decisiones de cada una de las empresas certificadoras, han ignorado descaradamente los verdaderos datos proporcionados por los asesores o cualquier recomendación adversa para aconsejar en su lugar que de todos modos se otorgue el certificado, priorizando así los intereses económicos de la empresa certificadora para la cual, en realidad, están trabajando.

El FSC debería encarar estos problemas a través de sus procedimientos de supervisión y acreditación. Sin embargo, en la práctica no puede ni lo hace. El contrato jurídicamente vinculante con las empresas certificadoras le impide hacer nada que pudiera “perjudicar los intereses económicos” de las certificadoras. Además, algunos de las ‘Cuatro Grandes’ certificadoras (SGS, SCS, SmartWood y Soil Association Woodmark) simplemente amenazaron con abandonar el FSC si se pone muy estricto en la aplicación de las normas. Consciente sin duda de la impresión que esto causaría entre sus competidores y financiadores, el FSC fue así forzado a la más completa sumisión. El resultado es que sigue otorgando certificados completamente inapropiados en todo el mundo, por ejemplo en Brasil, Camerún, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Indonesia, Irlanda, Sudáfrica...

Otra consecuencia de la estructura actual es que los certificadores captan la mayor parte del “flujo de ingresos” de la certificación, en tanto el FSC está permanentemente escaso de fondos y depende de donantes, que a su vez tienen sus propios planes para la organización.

Sin duda alguna, poder aprender lecciones del pasado es maravilloso. Pero parece claro que hay que resolver este problema de conflicto de intereses en el corazón del FSC si se quiere algún avance significativo en cuanto a que el FSC trabaje por los objetivos que la gran mayoría de los lectores de este boletín comparten. Por ejemplo, hay que cuestionarse el valor de invertir tanto esfuerzo en el proceso de Revisión de Plantaciones cuando, incluso en el caso de que el Principio 10 se mejorara radicalmente, se permitirá que los certificadores sigan ignorándolo olímpicamente.

Es necesario romper el vínculo financiero directo entre empresas certificadoras y empresas madereras y de plantaciones. Una forma de hacerlo sería que las empresas de maderero/plantaciones tuvieran que contratar directamente a la Secretaría del FSC para las evaluaciones con miras a la certificación. El FSC podría adjudicar a los certificadores los subcontratos para la realización de las evaluaciones (y la subsiguiente supervisión) sobre la base de licitaciones competitivas de modo que el certificador que ofrezca las normas más altas para la evaluación al mejor precio obtenga el contrato para cualquier evaluación dada. La actual "carrera para bajar los requerimientos" entonces se transformaría inmediatamente en una "carrera para aumentarlos". Podría obligarse a los certificadores, por ejemplo, a incluir en su "carpetas" de contratos determinado porcentaje de certificaciones de bosques comunitarios para poder participar de la licitación para la certificación de operaciones forestales industriales mayores y más lucrativas.

La Junta del FSC sería responsable de encargar una evaluación independiente de un muestreo aleatorio de certificaciones por año para garantizar que los certificadores cumplieron con sus contratos. Todo aquel que no lo hubiere hecho recibiría duras sanciones o se le retendrían sus pagos contractuales. La Secretaría del FSC cobraría por sus servicios, garantizando así un flujo regular de ingresos y disminuyendo su dependencia de la financiación externa.

Claro está que los certificadores resistirán encarnizadamente estos cambios, pues los obligarían a ser más rigurosos en sus evaluaciones. Pero la elección parece sencilla: o bien el FSC se libera de la presión asfixiante de las empresas certificadoras, o seguirá cayendo hasta que su credibilidad colapse por completo.

Por Simon Counsell, Rainforest Foundation. Nota: Existe una versión más detallada del informe y la propuesta en relación con este asunto que puede solicitarse al autor a través del correo electrónico: simonc@rainforestuk.com.

inicio

- Brasil: pidiendo explicaciones al FSC, Imaflora/Smartwood y Aracruz

El 1º de junio de 2006 se llevó a cabo el seminario "Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Avance del Agronegocio: preguntas y desafíos" en la ciudad de Vitória, estado de Espírito Santo, Brasil. Gracias al seminario, las comunidades Tupinikim y Guaraní y otras afectadas por los monocultivos a gran escala, además de varios sectores de la sociedad civil el estado de Espírito Santo, se reunieron para una reflexión profunda sobre este tema.

Se discutió la completa inadecuación del actual modelo de desarrollo basado en la expansión de grandes monocultivos como el eucalipto, el pino, la soja y la caña de azúcar en el campo brasileño. Se afirmó que es urgente reformar este modelo y empezar por la financiación de actividades productivas que deben seguir otros parámetros, dando prioridad a la vida, la diversidad y las personas y comunidades afectadas por los monocultivos de árboles a gran escala, en especial las mujeres, que son quienes más sufren estos impactos.

Durante la reunión se destacó el caso de Aracruz Celulose, que en 1999 intentó obtener la certificación FSC de sus plantaciones de eucalipto en el estado de Bahía. En aquel entonces la movilización fuerte y masiva de organizaciones, comunidades, movimientos e individuos impidió a Aracruz obtener el certificado. Luego la empresa "adquirió" la certificación en 2003, cuando compró unas 40.000 hectáreas en el estado de Río Grande do Sul a la empresa Riocell, que había obtenido el certificado del FSC para sus plantaciones en 2001. Sin embargo, la acción de los Tupinikim y Guaraní ante la Secretaría Internacional del FSC llevó a la empresa a anunciar que ella misma había "solicitado la cancelación de la certificación del FSC".

Sin embargo Aracruz siguió impune y las comunidades locales se preguntan cómo es posible que la empresa haya podido mantener en la región donde opera una certificación que exige respeto hacia los pueblos indígenas y sus tierras al tiempo que viola estos mismos derechos en otra región donde también opera.

Ahora exigen "una explicación de estos hechos por parte de los involucrados:

FSC – ¿Por qué permitió el FSC que desde el 2003 Aracruz mantuviera la certificación al mismo tiempo que ocupaba tierras indígenas? ¿Por qué el FSC no tomó medidas después de que los indígenas autodemarkaran sus tierras en mayo de 2005 ni después de que se los expulsara violentamente de dos aldeas en enero de 2006, cuando la casa de huéspedes de la empresa se transformó en cuartel general de la Policía Federal y en comisaría donde se mantuvo a dos indígenas presos durante horas? ¿Piensa el FSC que una empresa así mereció alguna vez ese certificado?

Aracruz Celulose – Si la empresa garantiza que nunca hubo indígenas en sus tierras, si afirma con tanta convicción que compró legalmente sus tierras en Espírito Santo, inclusive las que son indígenas, ¿por qué resolvió renunciar al certificado del FSC?

Imaflora/Smartwood – ¿Por qué Imaflora/Smartwood no investigó a la empresa Aracruz Celulose cuando ésta adquirió la empresa Riocell? ¿Por qué durante cerca de dos años permitió que Aracruz Celulose se quedara con la certificación al mismo tiempo que ocupaba tierras indígenas en Espírito Santo, hecho sobre el que abunda la información en internet?

Quedamos a la espera de las debidas explicaciones públicas de las partes involucradas. Esperamos que en el futuro el FSC no siga permitiendo la certificación de las empresas que violan los derechos humanos o perjudican las comunidades locales, sean éstas indígenas, quilombolas, pescadoras o campesinas. De hecho, llegó la hora de que el FSC promueva un buen manejo forestal que sea diversificado y garantice beneficios para todos. Con el proceso internacional en curso de revisión de la práctica de certificación de plantaciones de árboles el FSC dispone, en este momento, de una excelente oportunidad”.

Extractos de la carta abierta “A dureza do capital contra a vida - mas a Aracruz Celulose perdeu o selo FSC!” publicada por la Red Alerta contra el Desierto Verde el 4 de julio de 2006 (disponible –en inglés- en: http://www.wrm.org.uy/countries/Brazil/Open_Letter_Aracruz.html). Por más información sobre el Proceso de Revisión del FSC en Brasil, véase el “Documento para o Grupo Internacional de Revisão dos Princípios e Critérios do FSC para plantações de árvores” (disponible en portugués en: http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Carta_Revisao_FSC.pdf)

inicio

- Plantaciones certificadas en Uruguay: ¿puede el FSC garantizar tranquilidad de espíritu a los consumidores?

En marzo de 2006 el WRM publicó “Maquillaje verde. Análisis crítico de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay por el FSC” (véase <http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.html>). Este informe concierne a las cuatro principales empresas con plantaciones certificadas e incluye una crítica muy detallada de los informes de las empresas certificadoras que se complementa con entrevistas a trabajadores y gente de las comunidades locales de las zonas vecinas a las plantaciones. La conclusión es que ninguna de estas plantaciones cumple el mandato del FSC, pues no están manejadas de modo “ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable”.

Las dos empresas certificadoras involucradas (SGS y Smartwood) reaccionaron al informe enviando su respuesta al FSC. Basándose en esas “pruebas” el FSC difundió una declaración titulada “El FSC garantiza tranquilidad de espíritu a los consumidores” (véase --en inglés-- en http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/Peace_mind.pdf). Allí se cita a Heiko Liedeker, director de FSC Internacional, quien declara que “Al leer los informes de las empresas certificadoras se ve que en el documento del WRM hay información que se funda en equívocos o en algunos casos se presenta fuera de contexto” y termina prometiendo que “Los consumidores pueden contar con el sistema del FSC como garantía de buen manejo forestal”.

Creemos honestamente que al actuar de esta forma el FSC se pierde una buena oportunidad de cambio, especialmente en el contexto de la revisión de la certificación de plantaciones en la que la organización está hoy trabajando. El informe del WRM no “se funda en equívocos” en modo alguno, ni presenta nada “fuera de contexto”; se basa en los hechos.

Desgraciadamente, por mucho que quisiéramos no podemos comentar la respuesta de SGS por la sencilla razón de que el documento presentado ante el FSC no está disponible para el público. Podemos sin embargo comentar la

de Smartwood (disponible –en inglés– en http://www.wrm.org.uy/actors/FSC/fymnsa_clarifications.pdf), que expresa que “Las conclusiones del informe del WRM relativas a la interacción entre partes interesadas no concuerdan en numerosos puntos con los registros o la información que posee SW”. A este respecto, Smartwood brinda la siguiente información:

“El informe del WRM declara que el dirigente de un sindicato local (José Bautista) indicó a SW sus opiniones respecto de la certificación de FYMNSA y SW las ignoró (“lo que dije a SmartWood sobre la certificación de FYMNSA no lo tuvieron en cuenta para nada” y que “luego que vino SmartWood a los pocos días había un gran cartel de la certificadora en las oficinas de la empresa”). Queremos aclarar lo siguiente: SOIMANORPA, que Bautista dirige, se fundó en 2003. Bautista nunca fue entrevistado durante la evaluación inicial de FYMNSA simplemente porque esta organización no existía en aquel momento. Se lo entrevistó después, durante la evaluación de otra operación, Villa Luz, donde se reunió con los auditores de SW Jacques Boutmy y Rolyn Medina. En esa reunión indicó que en su opinión el WRM no estaba actualizado respecto de la realidad social o laboral de las operaciones en el propio campo. Indicó también que FYMNSA era [una empresa] líder en permitir al sindicato la interacción con los trabajadores de FYMNSA y que su sindicato mantiene una comunicación constante y muy abierta con FYMNSA.”

Esa es la versión de Smartwood, que aparentemente Heiko Liedeker considera verdadera. El día jueves 20 de julio de 2006 me comuniqué con Bautista y le pregunté si estaba de acuerdo con lo que planteaba Smartwood. Su respuesta fue: “Es todo falso”. Bautista es un hombre muy organizado y lleva un registro de todo lo que hace. Por lo tanto pudo rastrear la mencionada reunión con Jacques Boutmy y Rolyn Medina ¡y descubrió que ésta se llevó a cabo el 20 de octubre de 2004, mucho antes de que al WRM siquiera se le ocurriera hacer esta investigación!

Le pregunté más específicamente si en su opinión “FYMNSA era líder en permitir al sindicato la interacción con los trabajadores de FYMNSA”. Una vez más, Bautista respondió: “Es falso”. Con relación a la afirmación de SW de que “su sindicato mantiene una comunicación constante y muy abierta con FYMNSA” Bautista explicó que si bien la compañía recibe al sindicato, se trata tan sólo de una mera formalidad. Y añadió: “hace tres días me entrevistaron en Rivera [capital del departamento donde FYMNSA tiene su sede] el Canal 6 de televisión y cuatro radios locales y dije que la empresa estaba violando las normas laborales y que nunca tendría que haber sido certificada. Quizás sea por eso que SmartWood reaccionó así”.

En su informe ante el FSC, Smartwood añade que “Ahora FYMNSA contrató un auditor laboral externo para garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos laborales para todo el personal y los contratistas. Este auditor envía a FYMNSA informes mensuales sobre estos temas, incluidas las solicitudes de acción correctiva (CARs)”.

También le pregunté acerca de esto a Bautista, que me respondió: “De eso no sé nada”. Podría suponerse que el dirigente sindical con quien aparentemente FYMNSA mantiene tan buena comunicación sería la primera persona a quien se informaría de tan buenas noticias. Desgraciadamente, no es el caso.

Peor todavía, Bautista me explicó en detalle la muy conflictiva situación actual resultante de la violación de normas laborales por parte de la empresa y me envió un resumen escrito con los principales puntos del conflicto (véase http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/Carta_Batista.html). Contrariamente a lo que la respuesta de Smartwood parece implicar, el documento termina declarando que “El diálogo con el Sindicato existe pero a través de él no se ha conseguido revertir los incumplimientos laborales de FYMNSA ni el respeto a la organización sindical y al trabajador”.

Incluso sin tomar en cuenta todos los demás impactos ambientales y sociales detallados en el informe del WRM, lo anterior alcanza para enfatizar que en ese caso, donde hay una violación de derechos laborales, el FSC no puede tener la pretensión de creer que puede “garantizar la tranquilidad de espíritu de los consumidores”.

Por Ricardo Carrere, autor del informe mencionado en este artículo. Correo-e: rcarrere@wrm.org.uy

[inicio](#)

- El poder de los grupos empresariales. El caso del FSC local de Ecuador

Ecuador es uno de los países con una de las mayores tasas de deforestación a nivel mundial. En este proceso actúan diversos actores entre los que se encuentran no solamente las grandes empresas madereras que

típicamente realizan sus actividades de extracción de madera fluctuando entre la legalidad y la ilegalidad, sino también las empresas que deforestan para instalar grandes monocultivos de árboles, desde palma africana hasta pinos y eucaliptos.

Para calmar a la opinión mundial que se ha sensibilizado ante estos problemas y los rechaza, el mercado ha encontrado una solución: la certificación. Es así que en Ecuador tanto proyectos con un gran impacto ambiental como empresas muy destructivas tienen hoy un certificado FSC, como es el caso de las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles para sumideros de carbono de la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A. y las plantaciones industriales de árboles de las empresas ENDESA y BOTROSA.

El grupo nacional legalmente reconocido por el FSC en Ecuador es el Consejo Ecuatoriano para la Certificación Forestal Voluntaria (CEFOVE). Al igual que el FSC, está compuesto por una cámara ambiental, una económica y una social. La presidencia en el Consejo Directivo del CEFOVE rota regularmente cada año entre las tres cámaras y el poder de decisión en teoría se reparte equitativamente entre las tres cámaras. Sin embargo, no se tomaron medidas para asegurarse que los integrantes de las cámaras ocupen realmente la posición que les corresponde y es así que existen varias irregularidades y atropellos cometidos por las compañías madereras del Grupo Durini (Setrafor, Endesa, Botrosa, Acosa) y sus organizaciones de lobby: Fundación Forestal Juan Manuel Durini (FFJMD), Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) y Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA). Además la cámara económica está totalmente dominada por el GRUPO DURINI, que mediante la afiliación de cuatro de sus empresas y dos de sus organizaciones de lobby tiene la mayoría absoluta de voto en la cámara.

A modo de ejemplo: la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A., encargada de generar y negociar bonos de carbono en la bolsa de valores, se encuentra en la cámara ambiental cuando su sitio debería ser la cámara económica. Este hecho ha sido reclamado por los otros miembros de la cámara ambiental, pero PROFAFOR ha rehusado hacer el cambio respectivo. Para el año 2006 la presidencia del CEFOVE le corresponde a la cámara ambiental, y PROFAFOR ha sido designado como presidente. Como el año pasado la presidencia la tuvo Juan Carlos Palacios, de COMAFORS, por la cámara económica, eso significa que durante dos años consecutivos han primado los grupos económicos.

Por otra parte, la coordinadora del CEFOVE trabaja media jornada en su función en el CEFOVE y la otra media jornada en el despacho del Director Nacional Forestal, en el Ministerio del Ambiente. De esta situación surge un grave conflicto de intereses y la posibilidad de que los intereses públicos del Ministerio del Ambiente puedan influenciar la política del CEFOVE y viceversa.

A mediados del 2005, Acción Ecológica y el WRM publicaron el libro "Sumideros de Carbono en los Andes Ecuatorianos", un profundo estudio sobre los impactos de las plantaciones de PROFAFOR. Sin embargo, entre los miembros del CEFOVE no se ha tratado el estudio y no se han formulado comentarios con respecto a los cuestionamientos que revelan que sería imposible conceder la certificación a estos monocultivos. Por el contrario, la elección de PROFAFOR a la presidencia del Consejo Directivo del CEFOVE solo se explica como un respaldo institucional a esta empresa cuestionada.

La cámara económica ha pasado a tener el poder del CEFOVE, lo cual quedó claramente reflejado cuando en 2005 la Federación del Centro Awá del Ecuador (FCAE) --que forma parte de la cámara ambiental-- presenta una denuncia contra las empresas Setrafor, Endesa/Botrosa --miembros de la cámara económica-- y Plywood Ecuatoriana y CODESA --miembros indirectos mediante su afiliación a COMAFORS y AIMA-- por invadir su territorio y sus bosques, legalmente reconocidos como Reserva Etnobotánica de Asentamiento Ancestral Awá, provocar graves daños ambientales y sociales dentro del territorio Awá y las zonas directamente colindantes consideradas zona de amortiguamiento, y extraer árboles sin contar con los debidos permisos de los representantes legales de la FCAE.

Irónicamente, en este caso fue FCAE quien finalmente resultó cuestionada, por denunciar a uno de los miembros del CEFOVE. En cambio, no se adoptó ninguna medida para paralizar a las empresas madereras. Por el contrario, el CEFOVE resolvió que "las empresas SETRAFOR, CODESA y PLYWOOD, no tienen un control absoluto sobre los procedimientos y actitudes de sus empleados y contratistas en el campo". Peor aún, Endesa/Botrosa, con el respaldo del CEFOVE, recibió este año una certificación FSC expedida por GFA Consulting Group para sus plantaciones de árboles. Este certificado borra de un plumazo el historial de más de 40 años de violaciones de los derechos humanos de poblaciones locales y sistemática degradación ambiental por parte de las empresas del Grupo Durini. El amplio mercado internacional queda abierto para una de las empresas más destructora de los bosques primarios ecuatorianos.

No obstante, la falta de credibilidad del CEFOVE se ha puesto en evidencia con la reciente renuncia de la FCAE y la Fundación Alotropico, quien fuera uno de los miembros fundadores e impulsores de esta iniciativa. Jaime Levy, su director ejecutivo lo explica en la carta pública enviada a miembros del FSC y a CEVOFE el 13 de julio 2006: "Consideramos que es imposible seguir compartiendo un espacio cuyos objetivos están enmarcados en lograr un mejor manejo ambiental de los bosques, un respeto real para sus dueños y una repartición justa de las ganancias económicas de las operaciones forestales, con miembros como COMAFORS y las empresas productoras de contrachapados, quienes a nuestro juicio son los responsables de la ya casi desaparición de los bosques del Chocó de Esmeraldas". "Este Patrimonio de los Ecuatorianos y del mundo se encuentra ahora severamente amenazado por las acciones de estas empresas, y a pesar de sus discursos sobre la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos restantes, y sus membresías en CEFOVE y el FSC, lo que hemos visto en los últimos años en el norte de Esmeraldas es una realidad muy, muy distinta. Y en la actualidad, en estos momentos, la explotación con maquinaria pesada de los bosques remanentes sigue a un ritmo acelerado y con poco control del Ministerio de Ambiente."

Las plantaciones certificadas en el Ecuador son una muestra de las falencias del sistema, el cual está en manos de los poderes económicos que dominan el grupo del FSC para el Ecuador --CEFOVE--. Su enorme poder e influencia va en detrimento de los pobladores locales y de la necesidad de la conservación de los bosques.

Por Nathalia Bonilla, Acción Ecológica, correo electrónico: foresta@accionecologica.org, y Klaus Schenck, correo electrónico: klaus@regenwald.org

[inicio](#)

INVESTIGACIONES SOBRE PLANTACIONES CERTIFICADAS

En los últimos años el WRM ha coordinado con organizaciones locales de varios países de África, Asia y América Latina varias investigaciones para documentar los impactos de los monocultivos a gran escala sobre la gente y la naturaleza (véase <http://www.wrm.org.uy/publicaciones/inicio.html#libros>). En algunos de los estudios de caso se incluían plantaciones certificadas, en tanto uno de ellos (Uruguay) se centró exclusivamente en plantaciones certificadas por el FSC. Esta sección del boletín incluye breves resúmenes de los estudios de caso y evidencia algunas certificaciones problemáticas.

- Brasil: la certificación de las plantaciones de V&M y Plantar

El "Movimiento Alerta contra el Desierto Verde" es una amplia red de oposición a la expansión de las plantaciones en gran escala de eucaliptos en la región que comprende los Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahía, río Grande do Sul y Río de Janeiro. Su existencia y lucha se originan en los impactos sociales y ambientales comprobados de esas plantaciones, algunas de las cuales actualmente cuentan con la certificación del FSC.

Un equipo de dicha red participó en un estudio de caso realizado a fines de 2003 ("Certificando lo incertificable. Certificación del FSC de plantaciones de árboles en Tailandia y Brasil" (<http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/texto.pdf>) e investigó las plantaciones de las empresas V&M y Plantar S.A. Reforestamientos, certificadas por el FSC a través de las certificadoras Soci t  G n rale de Surveillance (SGS) y Scientific Certification Systems (SCS).

La empresa V&M posee 235.886 hect reas de tierra en el Estado de Minas Gerais, distribuidas en 25 propiedades, cuyo tama o oscila entre 1.000 y 36.000 hect reas. Plantar es propietaria de unos 15 predios rurales, que totalizan 280.000 hect reas.

El estudio comprob  que algunas de las plantaciones certificadas ocupan tierras usurpadas a sus habitantes originarios, con lo cual la certificaci n ha socavado las luchas de los pueblos locales por la recuperaci n de sus tierras. Se identific , adem s, que existen otras disputas entre los peque os agricultores y las compa as en relaci n con el uso de agroqu micos, el bloqueo de carreteras o la alteraci n del acceso y el manejo de los recursos h dricos.

La certificaci n del FSC tambi n ha debilitado gravemente los derechos de los trabajadores: "No hay disculpa posible para el silencio absoluto que mantienen la SGS y la SCS en sus Res menes p blicos y en los informes de

control anuales, sobre los graves problemas laborales de las unidades de manejo forestal certificadas pertenecientes a las empresas V&M y Plantar, en especial teniendo en cuenta la relevancia del tema en la discusión política local y en la prensa y la televisión del estado de Minas Gerais. Condiciones de trabajo inhumanas, jornadas excesivamente largas, trabajo infantil, tercerización ilegal de la mano de obra, condiciones de sujeción de los trabajadores, transporte irregular, trabajo insalubre y degradante, listas negras de dirigentes sindicales, falta de libertad y ausencia de autonomía sindical, son todos problemas que han sido objeto de innumerables artículos en los medios de prensa regionales y han estado en el centro de debates públicos en distintas municipalidades y en los parlamentos estaduais y federal”.

La recuperación de la tierra plantada con monocultivos de árboles para reconvertirla a bosques no es una tarea fácil, ni políticamente, ni en la práctica. En el caso de las plantaciones certificadas, la dificultad es todavía mayor y la certificación se transforma en un argumento del que se sirven los dueños de las plantaciones para enfrentarse a las comunidades locales.

El estudio de caso de Brasil también documenta cómo las plantaciones de eucalipto –incluyendo las de las dos compañías certificadas (V&M y Plantar)– han sido una de las causas principales de la destrucción de la vegetación nativa de “cerrado”. Como resultado, las comunidades locales se han visto privadas de sus formas de vida sostenibles. A los efectos de la certificación del FSC puede importar poco que las compañías de plantaciones hayan quemado el cerrado para obtener carbón e instalar plantaciones de eucalipto, ya que la destrucción tuvo lugar antes de noviembre de 1994. Sin embargo, “...el impacto de la destrucción del bioma se siente hasta el día de hoy; principalmente lo sienten los habitantes locales que perdieron gran parte de su flora, fauna y recursos hídricos, y sufrieron las consecuencias de la aplicación de los agroquímicos. Lejos de proteger lo que queda de la vegetación nativa, las miles de hectáreas plantadas con eucalipto terminaron convirtiéndose en un peligro”.

El estudio sostiene que los beneficios económicos y sociales provenientes de productos como el carbón vegetal utilizado en la producción de acero o la madera utilizada en la producción de celulosa para la industria del papel, son “reducidos si se los compara con los graves impactos producidos por las plantaciones industriales asociadas que afectaron las vidas de los trabajadores o los impactos socioeconómicos negativos que sufrieron las comunidades locales”.

Cabe destacar también un tema que tiene relación con el proceso de certificación en su conjunto: las irregularidades en el proceso de certificación que llevaron a un incumplimiento de los principios del FSC y a la influencia de intereses creados de las firmas certificadoras. El estudio concluye que el manejo forestal de V&M y Plantar infringe legislación nacional e internacional, como es el caso de algunos tratados de la Organización Internacional de Trabajo. En cuanto a la legislación ambiental, V&M y Plantar han incumplido la resolución que exige a emprendimientos de su tamaño, la obtención de permisos a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

El informe documenta además que las plantaciones de V&M y Plantar no cumplen con algunos principios del FSC en la medida que la mayoría de las plantaciones se establecieron en tierras con vegetación nativa de cerrado. Contribuyeron a destruir este bioma amenazado, causando al mismo tiempo daños sociales, ambientales, culturales y económicos.

El FSC se enorgullece de la atención que dedica a los temas sociales. Su credibilidad se basa en la consulta a las organizaciones, comunidades y poblaciones locales. Sin embargo, en el caso de Brasil, el proceso de consulta fue muy pobre. El Resumen público sobre V&M enumera distintas “partes interesadas” con los que según la SGS se realizaron “reuniones y discusiones”, pero no comenta los resultados de esas reuniones y discusiones. Los miembros de los sindicatos de la lista de “partes interesadas” supuestamente consultados por la SGS, niegan haber sido consultados durante el proceso de certificación en 1998.

Por otra parte, los servicios de las firmas certificadoras son pagados por las compañías que desean obtener la certificación, con lo cual aquéllas tienen un fuerte incentivo para certificar rápidamente sin imponer demasiadas condiciones ni vigilar el cumplimiento de los principios del FSC en forma muy estricta.

Por último, los informes de las certificadoras con respecto a las plantaciones de las empresas referidas carecen de un análisis cuidadoso del universo socioeconómico de los lugares donde se encuentran las plantaciones y de una contextualización. Los informes reflejan que los auditores hicieron una interpretación subjetiva, desde la elección del contenido y los puntos prioritarios de su estudio, pasando por una selección de los interlocutores menos críticos, realizaron visitas de campo orientadas por un horizonte interpretativo sumamente estrecho e ignorando las referencias temporales y espaciales del territorio.

La conclusión del estudio es que: “Después de evaluar la certificación de las compañías Plantar S. A. y V&M, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esa garantía que se pretende dar a los consumidores, hoy no existe”.

inicio

- Ecuador: beneficio cero para las comunidades por las plantaciones certificadas de FACE-PROFAFOR

En 1999, la empresa Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) del Ecuador S.A., contrató a la verificadora suiza SGS (Société Générale de Surveillance) para evaluar el manejo forestal de 20.000 ha de sus plantaciones de monocultivos de árboles en la sierra ecuatoriana. SGS le otorga en el año 2000 un certificado por plantaciones para absorción de dióxido de carbono (se trata del primer caso en que se certifica fijación y absorción de carbono en plantaciones forestales, no en bosques reales), y en diciembre de 2001 el Sello de Certificación Forestal que acredita que cumple con los “Principios y Criterios” del FSC.

Pero, ¿qué es FACE-PROFAFOR? FACE (por sus siglas en inglés Forest Absorbing Carbon Dioxide Emissions o “Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono”), se creó en 1990 por el Directorio de Empresas Holandesas Generadoras de Electricidad, N.V. Sep, con el objetivo inicial de establecer 150.000 hectáreas de plantaciones forestales y así compensar las emisiones de una nueva planta térmica de carbón que se construiría en Holanda y que implicaría la emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Por razones de costos, su acción se orientó al establecimiento de proyectos de forestación en países en desarrollo. Es así como FACE llega a Ecuador, donde establece el Programa FACE de Forestación (PROFAFOR) y financia a la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A. para establecer plantaciones de monocultivos forestales de especies exóticas (pinos y eucaliptos) y “fijar” CO₂ de la atmósfera.

A raíz de las graves consecuencias ambientales y sociales generadas por el establecimiento de plantaciones forestales, la organización ecuatoriana Acción Ecológica realiza en 2005 una investigación que dio como resultado el informe “Sumideros de carbono en los Andes ecuatorianos. Los impactos de las plantaciones forestales del proyecto holandés FACE-PROFAFOR sobre comunidades indígenas y campesinas”, disponible en <http://www.wrm.org.uy/paises/Ecuador/FACE2005.pdf>

El trabajo de campo identifica que la certificación FSC no solamente no garantiza que las comunidades bajo un proyecto forestal certificado reciban beneficios económicos, sociales y ambientales, sino que en el caso de comunidades indígenas de los Andes ecuatorianos ocurre precisamente lo contrario, en la medida que se ven obligadas a absorber los costos del proyecto y sus externalidades.

Por otro lado, con la certificación, FACE PROFAFOR gana en imagen y logra invisibilizar los impactos negativos generados por el proyecto. Las comunidades locales afectadas por proyectos certificados deben enfrentarse a la fuerza y el peso del “Sello Verde”, que resta credibilidad a sus reclamos y luchas.

El informe identifica qué obtiene PROFAFOR de las comunidades: tierra, trabajo y dinero.

En los contratos firmados, FACE-PROFAFOR no paga ningún tipo de arriendo en las tierras de propiedad comunitaria donde se produce la “Fijación y Absorción de Carbono” que negocia en el mercado internacional. La empresa se reserva el 100% de los Derechos por el Carbono absorbido mientras que exige a las comunidades que esas tierras no sean usadas para ninguna otra actividad fuera del mantenimiento de la plantación y asuman la totalidad de las responsabilidades del mantenimiento del sumidero por el plazo del contrato: de 25 a 30 años.

Por otro lado, la oferta de “generación de empleo” del proyecto es ficticia. Es más, la economía comunitaria debe absorber el impacto negativo provocado por dicho proyecto ya que para cumplir el contrato con FACE-PROFAFOR, las comunidades han debido recurrir en ocasiones a contratar gente de fuera, ya sea porque no poseen las destrezas necesarias para ejecutar determinado trabajo conforme a las especificaciones técnicas o porque las plantaciones se encuentran en terrenos de difícil acceso y sujetas a condiciones climáticas extremas.

En cuanto al dinero, de la cifra ofrecida inicialmente a la comunidad, en los tres primeros años PROFAFOR le descuenta el “costo” de las plantas y la asistencia técnica que le provee. Además de que las comunidades terminan recibiendo casi la mitad de lo ofrecido inicialmente, los contratos las comprometen a utilizar los recursos financieros provistos por FACE exclusivamente para el objeto del Contrato de Forestación, pero esos recursos generalmente no alcanzan para cubrir los gastos en los que las comunidades tienen que incurrir para completar el establecimiento

de las plantaciones.

Por otro lado, los contratos prohíben actividades como el pastoreo, lo que lleva en ocasiones a que las familias propietarias de ganado tengan que arrendar terrenos para sus animales, un gasto que antes no existía. También puede ocurrir que por falta de pastos tengan que reducir el número de cabezas de ganado.

Para mejorar su imagen, FACE aduce que sus actividades se realizan en tierras degradadas y en altitudes en las que la agricultura no es posible y el pastoreo no es rentable.

La realidad es muy distinta. FACE introduce plantaciones de pino en ecosistemas primarios, no en suelos degradados. Las plantaciones se establecen en un ecosistema muy frágil y de gran importancia hidrológica: el páramo, fundamental para la regulación de la hidrología regional y fuente de agua para la mayoría de la población de los Andes. La gran cantidad de materia orgánica hace que estos suelos tengan una gran retención de agua. La implantación de árboles, exóticos para el páramo, NO favorece la estabilidad del ecosistema. Por el contrario, transforma y daña la frágil estructura del suelo provocando un severo agrietamiento por los cambios en el régimen hidrológico. También afecta la fauna y flora del lugar y determina que se obtenga una plantación con un rendimiento deficiente, lo que finalmente redundará en perjuicio de la fijación de Carbono que se pretende lograr.

A ocho años de iniciadas sus actividades, FACE obtuvo la Certificación Forestal; poca relevancia tuvo el hecho de que para el establecimiento de sus plantaciones se destruyeran ecosistemas primarios, tampoco importó que no se demostraran medidas de mitigación de los impactos generados.

En resumen, la certificación del FSC en las plantaciones de FACE-PROFAFOR en Ecuador no garantiza que las comunidades "beneficiarias" del proyecto reciban beneficios económicos, sociales y ambientales. Más bien se demuestra una considerable --y cuestionable-- "flexibilidad" en la aplicación de los Principios y Criterios del FSC.

inicio

- Sudáfrica: investigación considera que las plantaciones de árboles certificadas por el FSC son un legado del apartheid

Una investigación muy completa sobre los impactos de las plantaciones industriales de árboles en una provincia de Sudáfrica ("A Study of the Social and Economic Impacts of Industrial Tree Plantations in the KwaZulu-Natal Province of South Africa", disponible en <http://www.wrm.org.uy/countries/SouthAfrica/book.pdf>), realizada por John Blessing Karumbidza, ha permitido identificar gran cantidad de impactos negativos de los monocultivos de árboles -- económicos, sociales y ambientales-- que afectan las comunidades locales, los recursos hídricos y los ecosistemas.

En los años 1980 el país fue testigo de una nueva ola de plantaciones industriales de árboles encabezada por las empresas madereras Sappi y Mondi, ambas con certificación FSC. Mientras que Mondi Business Paper y Mondi Millennium Newsprint (con 399.068 y 48.530 hectáreas respectivamente) fueron certificadas por la empresa SGS, acreditada por el FSC; la encargada de certificar a SAPPI Forests Group Scheme y SAPPI Forests (con 76.041 y 383.164 hectáreas respectivamente) fue la empresa Soil Association Woodmark (SA), también acreditada por el FSC.

El establecimiento de grandes monocultivos de árboles fue posible gracias a que los costos iniciales fueron mantenidos bajos artificialmente, en especial los salarios y la adquisición de tierras, y también a los generosos subsidios y otras disposiciones del gobierno en aquella época. Como resultado se pusieron en marcha dos procesos: el desencadenamiento de las relaciones rurales capitalistas y el uso intencional de los árboles como modificadores del paisaje. Todo esto ocurrió en el marco de las políticas de segregación y apartheid que han sido los instrumentos en la determinación de la naturaleza racial y espacial del paisaje agrario de Sudáfrica. A partir de las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica en 1994, la iniciativa principal del sector industrial vinculado a plantaciones de árboles supone dos estrategias particulares: el establecimiento de planes de plantaciones que se promocionaban como responsabilidad social o empresarial o como planes para la creación de empleos y el intento de incluir un componente BEE ("Black Economic Empowerment", poderío económico para los negros) en la estructura patrimonial existente de las principales empresas de cultivo industrial de árboles. Sin embargo, cada vez está más claro que estos programas han acrecentado la lista cada vez más larga de impactos negativos sociales, económicos y ambientales de las actividades del sector de las plantaciones industriales de árboles.

Estas plantaciones industriales han desplazado a la gente de sus hogares originales, perturbando los mecanismos tradicionales de sustento y sustituyendo praderas ricas y biodiversas con un damero de plantaciones y campos. Los insecticidas, herbicidas y otros contaminantes químicos que se usan en las plantaciones madereras, incluidos los derrames de combustible y aceite de vehículos y motosierras, están contaminando el agua y el suelo. Los árboles de las plantaciones también cambian el pH del suelo y todas las especies de árboles utilizadas en las plantaciones industriales invaden los cursos de agua, bosques, praderas y humedales, de modo que para erradicarlos se necesita usar más productos químicos y combustible contaminantes. Es poco común que se brinde el equipo de seguridad adecuado a los trabajadores, que se exponen a las emanaciones provocadas por la fumigación con plaguicidas y los pesados vehículos que se usan en las plantaciones.

No obstante todo esto y a pesar de los problemas con las plantaciones industriales de árboles en Sudáfrica, el FSC ha certificado el buen manejo de una superficie de 1.665.418 hectáreas.

El FSC menciona el caso del grupo SiyaQhubeka Consortium, certificado por SGS, que está “cambiando el paradigma del manejo de plantaciones” (FSC, sin fecha). Sin embargo, el referido estudio revela que el emprendimiento conjunto llamado SiyaQhubeka más que un consorcio es una sociedad entre Mondi y el gobierno (entre los dos comparten el 90%) que un auténtico acuerdo que redunde en un beneficio económico. Tampoco se ha establecido un marco temporal determinado para la transferencia de las acciones de Mondi a la comunidad, transferencia que llegará por iniciativa de Mondi más que de la comunidad o el gobierno.

Con la transferencia se acordó que toda vez que fuera posible “se brindará a las comunidades locales y los sudafricanos negros oportunidades para beneficiarse de las actividades industriales de la empresa”. Mucha de la madera plantada por la empresa estatal South African Forestry Company Limited (SAFCOL) no era adecuada para la celulosa que Mondi necesitaba, puesto que se trataba más que nada de pinos. En lugar de investigar usos alternativos de la tierra que pudieran dirigir a SiyaQhubeka hacia el desarrollo de la agrosilvicultura, las tierras que se limpiaron de pinos se están reconvirtiendo rápidamente al eucalipto, tarea que llevará cinco años completar. En las zonas que no estaban plantadas también se está plantando eucalipto, sin que exista la opción de un uso alternativo de la tierra.

SiyaQhubeka controla tres propiedades distintas. La plantación de St. Lucia, en el norte, tiene 12.550 hectáreas cultivadas. Se extiende a lo largo del límite occidental del parque de humedales Greater St. Lucia Wetland Park y cae enteramente dentro de la cerca para animales del parque. El razonamiento detrás de esta medida fue permitir a elefantes, búfalos y rinocerontes el acceso a las tierras de las plantaciones de SiyaQhubeka, incluidas 2.171 hectáreas no plantadas. Al norte de Richards Bay está la plantación de KwaMbonambi, con 6.257 hectáreas de árboles y 1.516 de hectáreas no plantadas. Al sur de Empangeni se encuentra la plantación de Port Durnford, de 3.010 hectáreas, con 947 hectáreas no plantadas. En conjunto, SiyaQhubeka tiene 21.817 hectáreas de plantaciones madereras y 4.634 hectáreas sin plantaciones industriales. Las áreas no plantadas son más que nada caminos, servidumbres, zonas de servicios, cortafuegos y pendientes o humedales incultivables.

Al tomar la decisión de otorgar el contrato a SiyaQhubeka, el Departamento de Asuntos Hídricos y Forestales (DWAF) enfatizó que en las tres zonas donde están las plantaciones, a saber Mtubatuba, KwaMbonambi y Port Durnford, se subcontrataría a personas de las comunidades locales para la provisión de servicios. Las actividades clave materia de los contratos son plantar, desmalezar y, en cierta medida, la tala rasa. Últimamente la tala de árboles se está volviendo cada vez más mecanizada y la industria está adquiriendo máquinas integradas que cortan, descortezan y apilan los troncos, dejándolos listos para la carga. La tala es uno de los procesos más caros y que exige mayor cantidad de mano de obra. Al mecanizar esta etapa del proceso de manejo de la madera se limita el potencial de creación de empleos en el sector. No sorprende que los únicos contratados de las comunidades que trabajan en las antiguas plantaciones de SAFCOL solamente participan en las operaciones de plantación y limpieza. Se trata de procesos que no exigen una gran inversión de capital. De hecho, en muchos casos los trabajadores se sirven de sus propias herramientas. Umbonambi Forestry Services (UFS), que obtuvo el contrato para plantar los eucaliptos de SiyaQhubeka en la plantación de KwaMbonambi, es uno de los ejemplos. UFS emplea solamente 17 personas con un supervisor y pretende que su equipo de trabajadores plante al ritmo de 6 hectáreas por día. En la plantación de Mtubatuba, el contratista de tres empresarios de la aldea Khula en Dukuduku, Thalaku, trabaja desmalezando y limpiando las plantaciones. Thalaku emplea entre 40 y 45 personas, dependiendo del contrato. También tiene contratos para retirar los pinitos jóvenes de la zona de St. Lucia Eastern Shores que se está rehabilitando con fines de conservación.

El autor de este estudio concluye que “de hecho, el FSC está certificando un legado del apartheid”.

- Swazilandia: los impactos de las plantaciones de Mondi Peak certificadas por el FSC

Las plantaciones madereras (de eucalipto, pino y acacia) cubren hoy cerca del 9% de la superficie de Swazilandia. En diciembre de 2004 Wally Menne, integrante de la coalición Timberwatch de Sudáfrica, publicó su investigación sobre los impactos sociales y ambientales de las grandes plantaciones madereras en Swazilandia: "Timber Plantations in Swaziland: An investigation into the environmental and social impacts of large-scale timber plantations in Swaziland" (disponible en <http://www.wrm.org.uy/countries/Swaziland/Plantations.pdf>).

El estudio de Menne abarca también las plantaciones de árboles certificadas de Mondi Forests (socia de la gigante Anglo-American Corporation), que opera en Swazilandia a través de su empresa asociada Peak Timber Ltd, y Mondi Timber, empresa sudafricana perteneciente al mismo grupo.

Mondi Forests (también conocida como Mondi Peak) posee casi 32.000 hectáreas de tierra en la aldea de Pigg's Peak, en el norte de Swazilandia; de éstas, cerca de 20.000 hectáreas son plantaciones (aproximadamente el 90% de las plantaciones de la zona de Pigg's Peak). Las mismas consisten en casi 6.000 hectáreas de pino y 14.000 hectáreas de eucalipto, así como una pequeña superficie de unas 30 hectáreas plantadas con aramo australiano [*Acacia melanoxylon*]. La mayor parte de los eucaliptos se exporta para la producción de pulpa, y también se exporta alrededor del 75% de los pinos. En los últimos diez años se ha dado una conversión sistemática del pino al eucalipto, que se considera genera mayores ingresos debido a la rotación más rápida y hoy constituye el 75% de las plantaciones de Pigg's Peak.

Las plantaciones de Mondi Peak fueron certificadas por primera vez por el FSC en 1996 como parte de las plantaciones de Mondi en Sudáfrica. Si nos guiamos por el sitio web del FSC parece que Mondi no tuviera plantaciones certificadas en Swazilandia, pues éstas se incluyen en la superficie total certificada para Mondi en Sudáfrica. La certificación se revisa cada cinco años y la próxima revisión será en 2007. La empresa certificadora SGS, acreditada por el FSC, realiza inspecciones anuales.

La investigación de campo intentó determinar si estas tres plantaciones habían beneficiado a las comunidades locales. Lo que sigue son algunas de las respuestas recibidas:

Nhlanhla Msweli, de la organización social Swaziland Campaign against Poverty and Economic Inequality (SCAPEI), que trabaja contra la pobreza y la desigualdad económica, recuerda que hacia 1997 hubo tres despidos masivos en la industria maderera, con inclusión de Mondi. Como motivo de la reducción de personal se adujeron problemas económicos, pero al mismo tiempo el trabajo se "tercerizó" a contratistas, a menudo ex empleados a quienes se había ayudado a establecer sus propios "negocios contractuales". Esto ha llevado a un mercado laboral extremadamente competitivo. La tercerización del trabajo por parte de las empresas no ha beneficiado a mucha gente, pues en realidad se trata de una forma de traspasar riesgos y costos a las nuevas empresas que se establecen. Cuando finalmente estas empresas caen y se pierden las inversiones que se hicieron con los pagos por despido, la pobreza aumenta.

La señora Duduzile (Matilda) Zwane, directora de la escuela primaria de Ekuthuleni (el pueblito de los trabajadores del principal aserradero de Mondi Peak), tiene una visión negativa de las plantaciones madereras. En su opinión, la comunidad no se ha beneficiado mucho con su establecimiento, desde el punto de vista tanto de las personas que trabajan en la industria como de quienes viven en la zona. Los trabajadores recibían sueldos bajos, aunque también algunos alimentos. Hace poco hubo una huelga en el aserradero, durante la cual se desató un incendio accidental, provocado por una chispa de una máquina de soldar, que encendió el aserrín y causó graves daños a la fábrica. Aunque la huelga había terminado, después de esto los trabajadores fueron despedidos. Iban a modernizar el aserradero y se instalarían equipos de tecnología moderna. El problema fue que la empresa usó grandes máquinas en lugar de dar más trabajo a la gente.

La empresa hizo muy poco para ayudar a la comunidad. Solamente los empleados permanentes y sus familiares directos podían usar la clínica de Mondi; los otros tenían que dirigirse al hospital público, en Pigg's Peak. Debido a la pobreza de la comunidad las muchachas se estaban convirtiendo en prostitutas y llegaban a aceptar 2 emalangenis (un dólar estadounidense equivale a 6 emalangenis) a cambio de relaciones sexuales, a menudo con hombres mayores empleados en la planta. Zwane añadió que la mayoría de las muchachas de la zona quedaron embarazadas antes de terminar séptimo de escuela.

No se ofrecieron becas ni se brindó asistencia para la construcción de una iglesia comunitaria. La escuela necesita desesperadamente más salones de clase y alojamiento para los maestros. La escuela no tiene patio y los caminos

del poblado están en muy mal estado. La condición general de los hogares de los trabajadores es muy pobre.

Zwane declaró haber notado que los ríos de la zonas madereras se habían ido secando a lo largo de los años. Recordó que cuando era pequeña se podía nadar en algunos lugares que hoy están secos.

Lo anterior está de acuerdo con lo que Rex Brown, de la consultora Environmental Consultancy Services, respondió durante la investigación. Brown declaró que las tres principales plantaciones del país (Shiselweni, Usutu y Mondi) se establecieron sin considerar mucho sus impactos a corto y largo plazo sobre el medio ambiente, el sustento, el agua y la contaminación. En lo que atañe al agua, Brown dijo que las plantaciones parecen actuar como esponjas y, en parte debido a las especies que las componen, absorben grandes cantidades de agua que no se libera a los ríos y arroyos. En combinación con la demanda siempre en alza de agua en las zonas de captación, esto lleva a que todos los años haya escasez de agua.

Para terminar, el autor del estudio concluye: "Para describir las plantaciones de la zona de Pigg's Peak lo mejor que puede decirse es que están muy mal manejadas y lo peor es que son un asco. Es increíble que estas plantaciones, que en algunas zonas son una mezcla de especies sin ningún manejo, infestadas de plantas invasivas exóticas, puedan haber recibido la certificación del FSC".

inicio

- Uruguay: cuatro empresas que no deberían estar certificadas

En 1987 se aprueba en Uruguay una legislación que implica la promoción --a través de exenciones impositivas y subvenciones-- de monocultivos a gran escala de árboles exóticos (principalmente eucaliptos y pinos) con destino a la exportación. Es así que el país, hasta entonces agrícola-ganadero, comienza a convertir parte de sus fértiles praderas en "desiertos verdes", que actualmente superan las 700.000 hectáreas.

Paralelamente comienza una creciente oposición a los monocultivos de eucaliptos y de pinos. Parte de esa oposición es el resultado de años de campañas y denuncias concretas de organizaciones ambientalistas, sociales y sindicales locales, que han venido documentando los impactos de ese modelo forestal. Pero también les cabe "mérito" a las propias empresas forestadoras, cuyas plantaciones han demostrado tener los impactos anunciados por las organizaciones de la sociedad civil y cuyas prácticas sociales han dejado mucho que desear.

A partir del año 2001 aparece en escena el FSC certificando 5.000 hectáreas de plantaciones de la empresa Industrias Forestales Arazatí (a través de la certificadora SmartWood). Entre quienes conocían a esa empresa, con su larga tradición de destrucción ambiental (desecamiento de humedales) y de política antisindical (que llegó a amenazar a representantes del Sindicato de la Madera con sacarlos a balazos), quedó de entrada muy claro que, si esa empresa era certificada, todas las demás también lo serían. Y efectivamente, así ha sido. Una tras otra, las empresas que solicitan la certificación la logran, pero los impactos continúan y se agravan a medida que las plantaciones --certificadas o no-- cubren extensiones cada vez mayores en distintas zonas del país.

En agosto de 2005 había siete empresas con plantaciones certificadas por el FSC en Uruguay, con un área total certificada de 133.711 hectáreas. De las mismas, cinco tenían áreas plantadas de más de 5.000 hectáreas, en tanto que dos eran pequeñas plantaciones (31 y 184 hectáreas respectivamente). En cuanto al origen del capital, dos eran extranjeras (la finlandesa COFOSA y la española EUFORES) y las restantes nacionales. Cinco fueron certificadas por SGS Qualifor, en tanto que dos lo fueron por SmartWood (Rainforest Alliance).

Un trabajo de campo del WRM llevado a cabo a fines de 2005 y publicado en marzo de 2006 ("Maquillaje Verde. Análisis crítico de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay por el FSC", al que se puede acceder en <http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.pdf>), describe a las principales empresas certificadas en Uruguay (EUFORES, COFOSA, FYMNSA, COFUSA) y llega a la conclusión de que ninguna de las cuatro empresas analizadas cumple con el mandato explícito del FSC, que plantea que "El Consejo de Manejo Forestal (FSC) promoverá el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques [sic] del mundo".

En el boletín N° 104 del WRM, sobre Uruguay, hicimos referencia a los resultados del estudio. Los graves impactos sobre el agua, la flora --con especial afectación de la pradera, principal ecosistema del país y base de la producción agropecuaria--, la fauna y el paisaje revelan que las plantaciones certificadas no cumplen las condiciones de manejo "ambientalmente apropiado" de los recursos naturales.

Por otro lado, la promoción de las plantaciones de monocultivos de árboles ha provocado diversas tendencias. Los beneficios empresariales del modelo forestal se optimizan en condiciones de latifundio, con lo cual se ha producido un incremento de la compra de grandes extensiones de tierra –en gran medida por parte de empresas extranjeras. A su vez, se trata de una actividad excluyente de otras actividades productivas por los impactos que provoca en las mismas, contribuyendo así al despoblamiento de la campaña. Además el empleo que han generado ha sido precario, zafra y tercerizado. Todas estas circunstancias dan por tierra con el requisito de manejo “socialmente beneficioso”.

En cuanto al requisito de constituir una actividad “económicamente viable”, lo constatado es que de no ser por la enorme subvención directa e indirecta --desde exoneraciones hasta construcción y mantenimiento de caminería-- recibida por el Estado, es decir, el pueblo uruguayo, seguramente la forestación no se habría desarrollado en el país.

Por último, en el caso concreto de Uruguay, la certificación de estas plantaciones no contribuye a promover el manejo sustentable de los bosques (que están protegidos por ley) y en cambio, avala la destrucción completa del principal ecosistema del país (la pradera).

La certificación implica, además, un debilitamiento de la oposición local, puesto que las empresas reciben un sello supuestamente “verde” otorgado por una institución prestigiosa en la que participan activamente ONGs sociales y ambientales, que además fueron quienes crearon y promovieron este esquema de certificación.

Por otro lado, esas certificaciones erosionan la credibilidad del FSC, cuyo cometido original apuntaba a la protección de los bosques mediante su manejo adecuado. El propio hecho de que el FSC considere que las plantaciones son “bosques” va en desmedro de su credibilidad, a lo que se suma la certificación de grandes monocultivos de árboles, que de hecho implica que los declara como “ambientalmente apropiados, socialmente beneficiosos y económicamente viables” (tal como define su mandato).

[inicio](#)

MÁS CUESTIONAMIENTOS DE PLANTACIONES CERTIFICADAS

El WRM ha difundido mucha información sobre la certificación de plantaciones, la que incluye dos libros, dos boletines especiales y numerosos artículos sobre un gran número de países (véase <http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/inicio.html>). En esta sección se incluyen algunos casos recientes que en nuestra opinión merecen ser atendidos en la revisión de la política de plantaciones del FSC.

- Australia: monocultivos forestales certificados en tela de juicio debido a las fumigaciones aéreas y la pérdida de la biodiversidad

Actualmente las principales empresas de plantaciones certificadas por el FSC que operan en Australia son: Albany Plantation Forest Company Pty Ltd (23.509 hectáreas), Timbercorp Forestry Pty Ltd (97.000 hectáreas), Integrated Tree Cropping Limited (166.536 hectáreas) y Hancock Victorian Plantations Pty Limited (246.117 hectáreas).

Entre los principales impactos concernientes a la certificación de las plantaciones de eucalipto (*Eucalyptus globulus*) recientemente establecidas en Australia se cuentan los sistemas de fumigación aérea con plaguicidas y la consiguiente contaminación del agua potable. Puede hacerse por ejemplo un seguimiento de los problemas en las zonas de captación de agua (que brindan agua potable a miles de habitantes del estado de Victoria) relacionados con las fumigaciones aéreas de las plantaciones de Hancock en: http://www.forest-network.org/Docs/amis_fsc_05-04.htm

Brenda Rosser, de la red de defensa del agua Tasmanian Clean Water Network, informó sobre los impactos sanitarios provocados por el uso incontrolado de plaguicidas en Tasmania: una ola de casos de cáncer y complicaciones neurológicas y el aumento de la tasa de incidencia del linfoma no-Hodgkins, cáncer de próstata, cáncer de tiroides y todos los cánceres combinados, así como el porcentaje más alto de diabéticos de Australia y tasas de enfermedades coronarias, obesidad, hipertensión y colesterol alto más elevadas que en los otros estados australianos (véase el boletín N° 97 del WRM). La conclusión de Brenda Rosser sobre la Revisión FSC es que “Si para el FSC la “sustentabilidad” sigue siendo un objetivo vago y confuso, el FSC se transformará (y creo que ya puede haber ocurrido) en nada más que un medio corporativo para mejorar la imagen de la industria ‘forestal’ ”.

- Colombia: la increíble y triste certificación de las plantaciones de Smurfit

En el año 2003 el WRM realizó una visita de campo a Colombia para conocer y recoger testimonios de las comunidades afectadas por las plantaciones de la empresa Smurfit. En aquel momento, plasmábamos en un artículo lo siguiente:

“...La gente local nos dijo que ‘las plantaciones han acabado con el agua’, que ‘las fumigaciones acaban con todo lo que hay en el suelo’, que ‘casi no hay fauna’, que antes había ‘nubes de pájaros’ y que ‘ahora sólo en verano aparece algún pájaro, pero en invierno no’ y que ‘se acabó también el pescado’.

Con respecto al empleo, nos informaron que ‘todo el trabajo se hace a destajo’ (por contratistas) y que ‘el contrato implica trabajar como dos y cobrar como uno’. Sólo sobrevive el más fuerte: ‘si [el trabajador] no llega al rendimiento, lo sacan; la persona no puede tener más de 40 años y todos tienen que ser fuertes para llegar a ese rendimiento’. En materia de organizaciones de trabajadores, no sólo no hay sindicato sino que ‘el que gruñe va para afuera’ y ‘por aquí no se comenta nada’.”

En aquel momento pensábamos que, con ese currículum, era imposible que alguna vez las plantaciones de la empresa pudiesen obtener la certificación de una producción social y ambientalmente responsable de la madera. Sin embargo, en ese mismo año, a pesar de su nefasto historial, la Smurfit logró certificar 38.000 hectáreas de plantaciones. Coincidentemente, en 2003 veíamos con suma preocupación que, a pesar de sus antecedentes, la Smurfit --a través de Víctor Giraldo-- integraba el Consejo Directivo del FSC (Forest Stewardship Council), según datos de la página web del FSC.

Recientemente el WRM fue invitado nuevamente a Colombia a recorrer zonas donde hay grandes extensiones de plantaciones de la misma empresa. La situación no ha variado un ápice. Por el contrario, los impactos se han profundizado. Mientras tanto, Smurfit continúa siendo integrante del Consejo Directivo del FSC.

Por más información sobre los impactos de las plantaciones de Smurfit en Colombia, recomendamos leer: <http://www.wrm.org.uy/bulletin/77/Colombia.html> ; <http://www.wrm.org.uy/bulletin/107/Colombia.html>, y “Cómo afecta a las comunidades campesinas y a la biodiversidad. La industria papelera en la zona Andina”, Guillermo Castaño Arcila, Revista Semillas en la economía campesina, N° 20, diciembre de 2005, <http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=24037>

- Ecuador: la plantación certificada Río Pitzara de Endesa-Botrosa (*)

En Abril de 2006, la empresa certificadora alemana GFA Consulting Group otorgó el sello del FSC a las operaciones madereras de la empresa Endesa-Botrosa y a sus plantaciones de árboles ubicadas en el predio Río Pitzará, de 8.380 hectáreas situado en la costa del Ecuador (GFA-FM/COC-1267). La certificación FSC de Endesa-Botrosa, perteneciente al Grupo Maderero Durini, significa un duro golpe para las cientos de comunidades locales campesinas, indígenas y afroecuatorianas, cuyos bosques y modos de vida han sido devastados por esta compañía durante décadas.

Desde el inicio, el proceso de evaluación de Endesa-Botrosa por la certificadora GFA ha sido superficial y la certificadora ha ignorado sistemáticamente el incumplimiento de los Principios y Criterios del FSC por Endesa-Botrosa. La evaluación se basó en la calificación de un cuestionario, que GFA envió al inicio de 2005 por correo electrónico a un grupo de unos 39 personas de ONGs, instituciones y compañías en Quito. De esta manera GFA no recibió ninguna crítica importante acerca de la maderera. Cabe señalar, que no todas las personas indicadas en la lista proporcionada por GFA lo han recibido y otros no han contestado el cuestionario.

Pero lo más grave es que GFA no consultó a ni un solo representante de los dueños de los bosques naturales de donde Endesa-Botrosa se abastece con más del 73% de la madera utilizada. La mayoría de los bosques naturales explotados por SETRAFOR, la empresa cosechadora del Grupo Durini que abastece a Endesa-Botrosa, son degradados irreparablemente o destruidos totalmente por los madereros, con graves impactos negativos para la

población local. Por otro lado, en Junio 2005 la organización ecuatoriana Acción Ecológica envió una queja detallada y formal a la certificadora, disponible en <http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/Botrosa.html>. En las semanas posteriores se realizaron reuniones con GFA tanto en el Ecuador como en Alemania, donde se expusieron las quejas en contra de Endesa-Botrosa.

Según el informe de certificación de GFA, el predio Río Pitzara de Endesa-Botrosa está localizado entre las provincias de Esmeraldas y Pichincha. Su vegetación natural es de Bosque Húmedo Tropical y Bosque Húmedo Premontano. La plantación ocupa 5.406 hectáreas, a las que se sumarán otras 1.800 hectáreas en los próximos años.

En el informe no se indican datos concretos y detallados sobre cuándo y en qué circunstancias la tierra fue adquirida por y adjudicada a Endesa-Botrosa, ni acerca de quiénes han sido los dueños anteriores o su uso y vegetación original. Sin embargo, precisamente en esta zona, la adjudicación de tierras a Endesa-Botrosa ha provocado duros y todavía no resueltos conflictos, denuncias por parte de campesinos locales y de la ONG Acción Ecológica, además de investigaciones y fallos en contra de la compañía por parte de instituciones públicas.

Un caso bien documentado es el del predio de 3.123 hectáreas El Pambilar, concedido a Botrosa en 1998 por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Después de más de dos años de violentos enfrentamientos entre campesinos y personal de la compañía, denuncias e investigaciones oficiales, el Ministerio del Ambiente confirmó en 2000 que 90% (2.830 has) de las tierras se encuentran dentro del Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y que fueron ilegalmente adjudicadas. El Ministerio decidió que Botrosa debía devolver estas tierras al Estado y el Tribunal Constitucional resolvió que los campesinos debían ser indemnizados por la empresa por los daños causados.

Por otro lado, el manejo de las plantaciones forestales de Endesa-Botrosa es deficiente. Un estudio de la GTZ de plantaciones con la especie Pachaco (*Schizolobium parahyba*) en 1997, describió que “sólo fue posible determinar una limitada sostenibilidad en la producción de madera” y que “faltan elementos fundamentales de un concepto sostenible de manejo forestal”. “En especial se constataron deficiencias en el reconocimiento del sitio forestal, del suelo y en el análisis de nutrientes, así como en la adaptación de la maquinaria a las pequeñas dimensiones de la madera y en especial en la capacitación de los operadores”. También se observó en las plantaciones que muchos árboles se enferman a partir de los siete años y finalmente mueren y que “una creciente parte de los árboles en las superficies más viejas de la plantación estaban en un estado muy malo”. Como consecuencia, la empresa perdió unas 2.500 hectáreas de plantación con Pachaco.

En otro estudio se indica que las plantaciones de la especie africana *Terminalia superba* en Río Pitzara se realizaron en bosque secundario y que la vegetación natural fue cortada para establecer la plantación. Peor aún, según la lista roja de la IUCN, la zona del Río Pitzara es el único hábitat de una especie de rana muy rara en peligro de extinción: la Rio Pitzara Robber Frog (*Eleutherodactylus helonotus*). Esta rana se ha encontrado solamente en dos lugares cercanos al Río Pitzara, en un área total de menos de 10 kilómetros cuadrados. La conversión de su hábitat natural en plantaciones industriales de árboles puede significar la extinción de la especie.

Fuera de su plantación existe otro requerimiento muy importante del FSC, que Endesa-Botrosa no está cumpliendo. Toda la madera no certificada procesada por la empresa tiene que ser “madera controlada”, lo que significa madera legalmente aprovechada.

En resumen, las ilegalidades en las que Endesa-Botrosa ha estado involucrada, tales como la adjudicación ilegal de tierras del Patrimonio Forestal del Estado a la compañía, el violento conflicto sobre las tierras con los campesinos locales y los crímenes cometidos contra ellos, la tala de remanentes de bosques y el hecho de que eventualmente la zona de bosque donde se estableció la plantación de Río Pitzara constituye el único hábitat de una especie animal en peligro de extinción, no permiten la certificación forestal FSC de la plantación. Sin embargo, hoy ostenta el sello del FSC.

Por Nathalia Bonilla, Acción Ecológica, correo electrónico: foresta@accioneologica.org
y Klaus Schenck, correo electrónico: klaus@regenwald.org

(*) Endesa-Botrosa es muy conocida por la gigantesca destrucción que sus actividades madereras provocan en los bosques ecuatorianos. No obstante, en este artículo queremos señalar las connotaciones de la certificación de sus plantaciones, por ser el tema central de este boletín.

[inicio](#)

- España: grupos españoles se retiran del FSC

Organizaciones españolas llevan más de un año reclamando la cancelación de la certificación de “gestión forestal sostenible” concedida por el FSC a la filial de la empresa de celulosa ENCE (Norfor), sin obtener ningún resultado. En junio de 2005 la “Asociación pola defensa da Ria”, integrante de la Federación Ecologista Gallega (FEG), hizo llegar a la delegación en España del FSC la urgente solicitud de cancelación de la referida certificación (<http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/cancelacionNORFOR.pdf>) acompañada de un informe crítico de la certificación de Norfor (<http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/informeNORFOR.pdf>). Solicitaba además que el referido informe fuera enviado al órgano central del FSC y que éste procediera a la revisión de los demás procesos de certificación en el mundo con la posibilidad de excluir al organismo certificador SGS del proceso de certificación.

Debido a la falta de respuesta por parte del FSC y a que consideran que la legitimación de la certificación FSC se debe fundamentalmente a la presencia de grupos ambientalistas en su seno, la Federación Ecologista Gallega resolvió, por decisión de Asamblea del 20 de mayo de este año, retirarse del Grupo de apoyo nacional al FSC en España y solicitar además a los otros grupos ecologistas españoles que adopten la misma medida (ver http://www.wrm.org.uy/actores/FSC/Solicitud_FEG.html)

La organización manifiesta su preocupación por la expansión alarmante de los monocultivos a gran escala --en especial eucalipto para la fabricación de celulosa para papel--, con sus efectos de degradación de los suelos, acelerada pérdida de biodiversidad y desaparición o “miserización” de comunidades rurales. Identifica, además, que la certificación del FSC constituye “una de las herramientas que las empresas están utilizando para obtener sus autorizaciones y ayudas económicas, además de para reforzar su posición en el mercado”. Frente a eso, la Federación Ecologista Gallega declara que “el apoyo del movimiento ecologista al sello no puede ser un cheque en blanco y tiene sentido en la medida en que detrás de cada certificación hay una gestión forestal de la que razonablemente se puede afirmar que es ‘ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable’, algo que hoy está muy lejos de la realidad”.

[inicio](#)

- Irlanda: cuestionan las plantaciones de Coillte certificadas por el FSC

En los últimos siglos ha habido una deforestación masiva de las tierras irlandesas. Lo que se sustituyó, se realizó más que nada con plantaciones de coníferas exóticas, prácticamente monocultivos, principalmente a cargo de una empresa: Coillte, que posee 438.000 hectáreas de plantaciones certificadas.

En 2002, la empresa Soil Association Woodmark otorgó a Coillte Teoranta la certificación FSC (antes habían sido certificados por SGS).

Sin embargo, la certificación de estas plantaciones ha sido duramente criticada en Irlanda por varias razones. Algunas de éstas responden a que estas plantaciones:

- han contribuido a la contaminación de las aguas debido a la acidificación, la acumulación de sedimentos y la contaminación con fertilizantes fosfatados.
- matan la flora nativa a causa de la enorme disminución de la luz que llega al suelo.
- aumentan el riesgo de ataques de insectos y enfermedades (por ejemplo, ha habido brotes de gorgojo del pino, que antes no se conocía en Irlanda).
- son muy susceptibles a los incendios dado el contenido de resina de las especies no nativas. Este riesgo aumenta en suelos de turba.
- contribuyen al aumento de los daños materiales debido al drenaje, la plantación, la construcción de carreteras y la tala.
- contribuyen a la despoblación y decadencia de los poblados rurales. El tipo de forestación que se practica actualmente en Irlanda utiliza procesos muy mecanizados y lleva a que la mano de obra necesaria sea mínima.
- destruyen la biodiversidad nativa.

Debido a lo anterior, la organización Woodland League de Irlanda declaró que “A pesar de todo esto, Coillte ha logrado obtener la certificación del FSC según una norma nacional mucho más débil que los principios del FSC desarrollada por una empresa llamada IFCI”.

Puede obtenerse más información sobre el caso de las plantaciones de Coillte en:
<http://woodlandleague.org/info/info/IT&F-Coillte&CertificationJan2005.htm>

[inicio](#)

- Venezuela: certificación de Smartwood a plantaciones de empresa chilena puesta en tela de juicio

Lo que sigue son las conclusiones presentadas en un informe de viaje (disponible en: <http://www.wrm.org.uy/paises/Venezuela/Gira2006.pdf>) de la investigación realizada recientemente por 4 representantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles en la zona donde se encuentran ubicadas las plantaciones de Uverito, nombre con el se conocen alrededor de 600.000 hectáreas de plantaciones de pinos instaladas en los Estados de Monagas y Anzoátegui. En el año 2003, la empresa SmartWood certifica 12 predios, con un total de 139.650 hectáreas, de la empresa Terranova de Venezuela (TDV) que forman parte de dichas plantaciones. La empresa TDV pertenece al Grupo Forestal Terranova con sede en Chile, vinculado a otras empresas chilenas y a capitales norteamericanos.

“Durante todo nuestro recorrido a lo largo de la zona de las plantaciones de pinos pudimos observar poblaciones muy pobres prácticamente sin servicios. Increíblemente esto también se afirma en el informe de certificación de SmartWood, que dice que “la mayoría de esos poblados poseen una situación precaria en vivienda y servicios conexos de agua, cloaca y recolección de basura, aunado a los bajos niveles de atención en salud y educación”. Aparentemente estas plantaciones no han traído a los poblados de la zona mejoras significativas ni nada parecido a lo anunciado por las empresas y quienes están vinculados a ellas a la hora de promocionar los monocultivos forestales. Ni siquiera en poblaciones como Chaguaramas, donde se nos informó que no había prácticamente gente en el pueblo cuando pasamos por allí porque la mayoría estaba trabajando en el vivero de la empresa forestal, se podía constatar que la gente se viera muy beneficiada por esos empleos. En términos generales se podría afirmar que desde el punto de vista social estas plantaciones no han sido socialmente beneficiosas para las comunidades cercanas a ellas.

La tierra resquebrajada y los continuos incendios en las áreas de plantaciones hablan a las claras de un cambio total del ecosistema natural, que donde ha podido sobrevivir está lejos de tener esas características. El grado de afectación del ecosistema natural y los recursos hídricos de la zona, a pesar de que en muchos casos pueden observarse a simple vista, merecerían un estudio más en profundidad. Los pocos estudios que se han publicado al respecto hablan de cambios estructurales importantes en el suelo y afectación en los recursos hídricos, aunque generalmente lo que se ha analizado es el grado de afectación que estos factores han producido en los pinos y no en el ecosistema natural. De las observaciones que se pudieron realizar a simple vista durante el recorrido se puede deducir que las plantaciones han generado un ambiente propicio para que se generen incendios que ocasionaron graves daños ambientales, sociales y económicos, que los cursos de agua que dependen en gran medida de los sistemas naturales han sido afectados y que muchos de los cursos de agua como el Río Morichal Largo se encuentran contaminados y muy probablemente como consecuencia de la gran cantidad de agrotóxicos que se utilizan en las áreas de plantaciones. Desde el punto de vista ambiental la situación amerita por lo menos un estudio serio de los impactos existentes hasta el momento antes de continuar con las plantaciones a gran escala.

Finalmente, desde el punto de vista económico el proyecto de plantaciones de Uverito ha sido posible no sólo por los 275 millones de dólares que hicieron falta para establecerlas, tal lo afirmado por representantes del organismo gubernamental responsable CVG, sino que ha recibido de parte del gobierno otro tipo de apoyos económicos en infraestructura. Entre ellos, tal cual lo afirma el gobierno, los 800 millones de dólares ya entregados por la construcción del puente y otros tantos millones prometidos para esta obra y para completar las nuevas carreteras, que como se detalló durante la recorrida beneficiarán casi exclusivamente a las multinacionales relacionadas a las plantaciones. No hemos podido averiguar exactamente cuanto ha recibido el Estado venezolano de la multinacional TDV, aunque sí sabemos que la negociación ha sido denunciada por fraudulenta y que la razón social de la empresa TDV, certificada por SmartWood, ha sido sustituida por la multinacional Masisa. En resumidas cuentas, las plantaciones y los emprendimientos industriales relacionados a ellas no hubieran sido posibles si el Estado venezolano no hubiera aportado mucho más de lo que aparentemente ha recibido y recibirá a cambio”.

A pesar de que como lo indica el informe durante muchos años hemos escuchado decir, tanto a representantes de gobierno, de empresas, académicos/as y hasta a representantes de ONGs venezolanas, que “las plantaciones de Uverito” no han causado nunca ningún problema y que además se instalaron en lugares donde antes no había “nada”, este informe arroja dudas sobre dichas aseveraciones y pone en tela de juicio el análisis llevado a cabo por SwartWood sobre la sustentabilidad ecológica, económica y social de dichas plantaciones.

Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques
Este boletín también está disponible en inglés, francés y portugués
Editor: Ricardo Carrere

Movimiento Mundial por los Bosques
Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay
tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985
wrn@wrn.org.uy
<http://www.wrn.org.uy>

